

INFORME JURÍDICO SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL REGISTRO, LA ACREDITACIÓN Y LA CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE I+D+i DE CASTILLA-LA MANCHA.

Por parte de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha (en adelante, INNOCAM), a través del Servicio de Técnicos y Económicos, se ha solicitado informe jurídico en relación con el proyecto de decreto arriba referenciado.

La emisión del presente informe se realiza en virtud de lo dispuesto por el artículo 11.1 de la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación de los servicios jurídicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el ejercicio de las funciones atribuidas por el artículo 4.4 del Decreto 108/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, donde se expone que *“En la elaboración de la norma se recabarán los informes y dictámenes que resulten preceptivos, así como cuantos estudios se estimen convenientes”*.

En el expediente remitido, junto al texto propuesto de dicho proyecto, se han incorporado los siguientes documentos:

- Informe de resultados de 30 de noviembre de 2023 y anexo de la consulta pública previa realizada sobre el proyecto de decreto, acompañados de un documento relativo a la fase de participación de esta consulta.
- Memoria justificativa del proyecto de decreto suscrita el 17 de junio de 2024 por la persona titular de la Gerencia de INNOCAM.
- Resolución de 18 de junio de 2024 de la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se autoriza el inicio del procedimiento de elaboración del texto proyectado.

Una vez examinada la documentación recibida se informa lo siguiente:

PRIMERO. – Objeto de la disposición proyectada y su justificación.

Es objeto del proyecto que nos ocupa, en virtud de su artículo 1, *“(…) regular el registro, la acreditación y la clasificación de los agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha, en adelante SIDICAM, de las entidades cuyo ámbito de actuación en materia*

de I+D+i se realice en Castilla-La Mancha, del personal investigador que lleve a cabo su trabajo en instituciones públicas o privadas de Castilla-La Mancha y de las infraestructuras y equipamientos de los entes públicos del SIDICAM”.

Este texto propuesto es fruto de los mandatos contenidos en la Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha, dentro de sus artículos 15 y 16. Así, el primero de estos preceptos, titulado “Agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha”, establece que:

“1. Son agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha:

a) Todas las universidades con presencia en la Región, con especial consideración de la Universidad de Castilla-La Mancha.

b) El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

c) La Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha.

d) El Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha.

e) Los centros públicos y privados de I+D+i.

f) El Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha.

g) Las fundaciones y otras organizaciones de fomento y transferencia de conocimiento.

h) Los clústeres.

i) Otros entes públicos o privados autonómicos gestores de I+D+i.

j) Las organizaciones empresariales y empresas que desarrollan actividades de I+D+i, así como actividades de transferencia tecnológica, difusión y divulgación tecnológica y científica entre las empresas.

k) Aquellas otras entidades, instituciones, personas o estructuras no incluidas en los puntos anteriores que desarrollen actividades referidas a la generación, aprovechamiento compartido y divulgación de conocimientos.

2. Las entidades públicas y privadas que favorezcan la financiación de las actividades de I+D+i, mediante mecanismos tradicionales o el desarrollo de nuevos instrumentos podrán tener la consideración de agentes de financiación del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha.

3. El Gobierno de Castilla-La Mancha podrá crear, suprimir y adscribir los Institutos Universitarios de Investigación conforme a la legislación vigente. Estas decisiones deberán adoptarse a iniciativa de los Consejos Sociales de las respectivas universidades, previos informes de los Consejos de Gobierno de las respectivas universidades y de una agencia externa de evaluación de la investigación.

4. Reglamentariamente se regulará el sistema de clasificación, acreditación y registro de los agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha”.

Por su parte, el segundo de los preceptos citados, bajo el título “Registro de los agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha”, expresa que:

“1. La Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha creará y gestionará un registro público de agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha que permita a la sociedad, a los investigadores y a las empresas castellanomanchegas conocer el potencial de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación de Castilla-La Mancha. Este registro tendrá un carácter público y meramente informativo con los siguientes objetivos:

a) Identificar los centros, instituciones, clústeres y entidades implicados en la ciencia, la tecnología y la innovación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para, a partir del conocimiento de su estructura y organización, llevar a cabo acciones acordadas para el fortalecimiento y la excelencia de los mismos.

b) Identificar a los investigadores y a los grupos de investigación, así como sus líneas de investigación y su oferta tecnológica, respetando la autonomía de los grupos de investigación en su orientación y organización, para promover su participación en proyectos conjuntos regionales o suprarregionales.

2. En este registro se inscribirán las instituciones, organismos y entes públicos que formen parte de la Administración Autonómica y desarrollen funciones de investigación, así como las instituciones, empresas y organismos de los sectores público y privado que perciban fondos que la Comunidad Autónoma destine a los fines de la presente ley.

Los investigadores que llevan a cabo su trabajo en instituciones públicas o privadas de Castilla-La Mancha habrán de estar inscritos en el registro siempre que desarrollen su actividad investigadora subvencionada en todo o parte con programas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

3. Este registro incluirá el inventario de infraestructuras y equipamientos de los entes públicos del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha.

4. Reglamentariamente se regulará la organización y funcionamiento del registro, junto con las condiciones mínimas exigibles para ser inscrito, en todo caso acordes con los criterios con los que se evalúa y acredita la actividad investigadora.

5. La inscripción en el registro será preceptiva para todas aquellas personas físicas o jurídicas, centros y grupos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación que quieran acogerse a las convocatorias regionales, determinándose en el reglamento de organización y funcionamiento del registro un periodo transitorio”.

En lo que se refiere a su justificación, se considera que el texto proyectado es necesario y conveniente, tal y como contempla la memoria justificativa aportada de 17 de junio de 2024, en la que se dice lo siguiente:

“El 20 de julio de 2020 se publicaba en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha, cuya finalidad es la de fomentar, coordinar y dar estabilidad presupuestaria al sistema castellano manchego de ciencia, tecnología e innovación, la actividad investigadora y la transferencia de conocimientos a la sociedad, articulándose en torno a tres grandes líneas de actuación:

a) La implantación de un sistema de planificación, seguimiento y evaluación conjunto que defina las líneas prioritarias de actuación en convergencia con los documentos estratégicos europeos y nacionales y que programe la utilización de forma estable, periódica y previsible, de los recursos disponibles de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la I+D+i.

b) La creación de la estructura institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha encargada de la planificación en materia de investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico e innovación, con base a objetivos previamente definidos.

c) El establecimiento de una serie de medidas sistemáticas dirigidas a promocionar e incentivar la investigación científica y técnica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Con el objetivo de desarrollar la tercera de estas líneas de actuación, la Ley 4/2020, de 10 de julio, identifica en el artículo 15 a los (...) agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha:

(...)

Por otro lado, en el artículo 16 se establece que la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha creará y gestionará un registro público de agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha.

Con la aprobación del Decreto 54/2022, de 21 de junio, por el que se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, en adelante INNOCAM, se establece como uno de los objetivos a perseguir, el promover las relaciones de colaboración entre los agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha impulsando la creación y fortalecimiento de redes de conocimiento entre agentes públicos y privados desde una perspectiva de intercambio y de investigación abierta. Además, el Decreto 54/2022, de 21 de junio, regula dentro de sus funciones, el mantenimiento, actualización y difusión, en coordinación con otros agentes del sistema regional de I+D+i de servicios de vigilancia tecnológica, manteniendo una base de datos relativa a investigadores regionales y empresas innovadoras, equipos e infraestructuras, así como los proyectos ejecutados por ambos colectivos regionales, de forma individual o en consorcio, independientemente de la fuente de financiación de los mismos.

Así pues, reglamentariamente se regulará el registro, la acreditación y la clasificación de los agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha, disponiendo de un catálogo de los agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha, cuyo objetivo es dar a conocer el conjunto de entidades públicas y privadas que interactúan en la región para generar, promover, desarrollar y difundir actividades de I+D+i en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”.

SEGUNDO. – Naturaleza jurídica de la disposición proyectada.

A la vista del objeto descrito en el ordinal anterior no cabe duda de que nos encontramos ante una disposición de carácter general de rango reglamentario que, como se ha mencionado, pretende desarrollar la regulación contenida en la Ley 4/2020, de 10 de julio, en lo referido al registro de agentes del Sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha.

Es por ello que el proyecto responde a la tipología de los denominados reglamentos ejecutivos, que el Tribunal Constitucional en su Sentencia nº 18/1982, de 4 de mayo, definió como aquellos que están *“directa o concretamente ligados a una ley, a un artículo o artículos de una ley, o a un conjunto de leyes, de manera que dicha ley (o leyes) es completada, desarrollada, pormenorizada, cumplimentada o ejecutada por el reglamento”*, señalándose también por el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 28 de enero de 1997, que *“el reglamento ejecutivo es aquel que desarrolla una Ley o la complementa”*.

No obstante, el hecho de que se trate de un reglamento ejecutivo no es óbice para que pueda calificarse también como organizativo, al menos en lo que se refiere a aquellos aspectos relativos a la organización del registro de agentes señalado. En este sentido, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, entre otros, en su Dictamen nº 194/2019, de 14 de mayo, afirmó que *“(...) Efectivamente, el carácter netamente autoorganizativo de un proyecto de disposición reglamentaria no ha impedido al Consejo conceptuar como preceptiva su intervención en el proceso de redacción de una norma reglamentaria, cuando (...) ésta presentaba un plausible engarce legal y una vocación de desarrollo de la Ley del que deducir su naturaleza ejecutiva (...)*, añadiendo después que *“(...) el mero carácter organizativo de la norma tampoco puede ser motivo que impida su calificación como disposición dictada en ejecución de ley -reglamento ejecutivo-, pues como señala el Tribunal Supremo en su Sentencia de 9 de julio de 1993, -Ar. RJ 6187, FJ 5-: ‘tiene razón la parte actora cuando afirma que los conceptos de reglamentos organizativos y reglamentos ejecutivos no son contrapuestos, pues, en efecto, también un reglamento organizativo puede ser ejecutivo, si es que desarrolla o ejecuta los principios organizativos de una Ley. Pero [...] ello no ocurrirá siempre y sólo por el hecho de que la Ley cite o mencione a un órgano, sino que será preciso, para calificar al posterior reglamento de ejecutivo, que la Ley remita al Reglamento la posterior regulación en la materia de acuerdo con los principios que ella misma impone; sólo entonces podrá decirse que el Reglamento «ejecuta» la Ley”*.

TERCERO - Marco competencial en el que se inserta la disposición proyectada.

La actuación que pretende desarrollarse mediante la aprobación de la disposición proyectada tiene su fundamento inicial en el artículo 44.2 de la Constitución Española, que contempla como principio rector de la política social y económica la obligación de los poderes públicos de promover la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Desde el punto de vista de la distribución competencial, el Texto Constitucional recoge en su artículo 148.1.17ª que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de fomento de la investigación, mientras que en su artículo



149.1.15ª se establece como competencia exclusiva del Estado el *“Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica”*. En relación con tales preceptos, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha señaló, en su Dictamen nº 163/2019, de 30 de abril, emitido en relación con el anteproyecto de Ley de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha, que *“(…) recogen competencias similares en lo que se refiere al fomento de la investigación, produciéndose una concurrencia de competencias estatales y autonómicas, si bien ha de reconocerse también que al Estado le corresponde un plus competencial, que viene dado por el hecho de que la coordinación sobre la materia le corresponde en exclusiva a él”*, siendo la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 90/1992, de 11 de junio, la que recoge la principal doctrina sobre este reparto de competencias.

De conformidad con la habilitación constitucional antedicha, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye a la Junta de Comunidades, en su artículo 31.1.17ª, la competencia exclusiva sobre *“Fomento de la cultura y de la investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2 del artículo 149 de la Constitución, prestando especial atención a las distintas modalidades culturales de carácter regional”*. Asimismo, su artículo 37.3 señala que, en el ejercicio de sus competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, *“[...] la Comunidad Autónoma fomentará la investigación, especialmente la referida a materias o aspectos peculiares de Castilla-La Mancha, y la creación de centros universitarios en la región”*.

Dentro de este marco jurídico, a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes le corresponde, en virtud del artículo 1.1 del Decreto 108/2023, de 25 de julio, el diseño y la ejecución de la política regional en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, conforme a los acuerdos del Consejo de Gobierno y a la legislación vigente, por lo que a este órgano compete la iniciativa y promoción para la elaboración y aprobación del proyecto objeto de este informe.

Por otra parte, y según prevé el artículo 128.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, *“El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde (...) a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos (...)”*. A estos efectos, el artículo 13.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha señala que *“El Consejo de Gobierno (...) ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en el marco de la Constitución, del presente Estatuto, de leyes del Estado y de las leyes regionales”*. En desarrollo de esta previsión, el artículo 11.2.c) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, expresa que al Consejo de Gobierno corresponde *“Aprobar las normas reglamentarias de desarrollo de las leyes (...)”*, a lo que hay que añadir que el artículo 36.1 de este mismo texto legal, en consonancia con el reseñado

artículo 13.1 del Estatuto de Autonomía, dispone que *“El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Consejo de Gobierno, sin perjuicio de la facultad de sus miembros para dictar normas reglamentarias en el ámbito propio de sus competencias”*.

De acuerdo con todo ello, encontrándonos ante una disposición reglamentaria cuyo objeto es desarrollar (parcialmente) la Ley 4/2020, de 10 de julio, su aprobación vendría atribuida al Consejo de Gobierno, debiendo adoptar esta norma la forma de decreto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37.1.c) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre.

CUARTO. - Estructura y contenido de la disposición proyectada.

El texto remitido se estructura en un título, una parte expositiva y una parte dispositiva.

El título, como no podía ser de otra forma, hace alusión al tipo de disposición ante el que nos encontramos y la materia que regula.

La parte expositiva, conformada por catorce párrafos, contiene los aspectos relativos al marco competencial y normativo en el que se inserta el proyecto, su justificación y objeto, así como las alusiones al cumplimiento de los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, finalizando con una fórmula promulgatoria.

La parte dispositiva se integra por los siguientes capítulos, artículos y disposiciones:

Capítulo I. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Artículo 3. Agente del SIDICAM.

Artículo 4. Régimen jurídico.

Artículo 5. Clasificación de entidades y recursos humanos del SIDICAM.

Capítulo II. Inscripción en el registro de agentes del SIDICAM.

Artículo 6. Registro de agentes del SIDICAM.

Artículo 7. Competencia e inicio del procedimiento.

Artículo 8. Requisitos de las entidades para inscribirse en el registro de agentes del SIDICAM.

Artículo 9. Requisitos de las personas físicas para inscribirse en el registro de agentes del SIDICAM.

Artículo 10. Requisitos para inscribir en el registro de antes del SIDICAM a infraestructuras y equipamientos.

Artículo 11. Inscripción de oficio en el registro de agentes del SIDICAM.

Artículo 12. Solicitud de inscripción en el registro de agentes del SIDICAM.

Capítulo III. Acreditación y clasificación como agentes del SIDICAM.

Artículo 13. Acreditación y clasificación de agentes del SIDICAM.

Artículo 14. Requisitos específicos para acreditarse en el SIDICAM como universidad, instituto de investigación o centro tecnológico.

Artículo 15. Requisitos específicos para acreditarse en el SIDICAM como instituto universitario de investigación.

Artículo 16. Requisitos específicos para acreditarse en el SIDICAM como unidad de I+D+i empresarial.

Artículo 17. Requisitos específicos para acreditarse en el SIDICAM como agente de ejecución.

Artículo 18. Requisitos específicos para acreditarse en el SIDICAM como entidad singular.

Artículo 19. Acreditación de oficio como agente del SIDICAM.

Artículo 20. Solicitud de acreditación y clasificación como agente del SIDICAM.

Capítulo IV. Instrucción y resolución del procedimiento, validez, protección de datos y actividades estadísticas.

Artículo 21. Instrucción y resolución del procedimiento de inscripción, acreditación y clasificación como agente del SIDICAM.

Artículo 22. Modificación de circunstancias de los agentes registros o acreditados como agentes del SIDICAM.

Artículo 23. Pérdida del reconocimiento y cancelación de la inscripción y acreditación en el registro.

Artículo 24. Validez de la inscripción en el registro de agentes del SIDICAM y de la acreditación como agente del SIDICAM.

Artículo 25. Protección de los datos del registro.

Artículo 26. Actividades estadísticas.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.

Disposición final primera. Habilitación de desarrollo normativo.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Llevado a cabo el análisis de la estructura y contenido del proyecto que nos ocupa se hace necesario formular las siguientes **observaciones generales**:

- En relación con la materia recogida en el decreto propuesto y su objeto, cabe advertir que, además de las cuestiones relativas a la clasificación, acreditación y registro de los agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha, el texto debe abordar la creación del propio registro y, conforme dispone el artículo 16.4 de la Ley 4/2020, de 10 de julio, los aspectos concernientes a su organización y funcionamiento. Y es que, salvo la previsión del artículo 6.1 del proyecto, no se observa mención alguna a aspectos como los siguientes, cuya inclusión en el texto ha de plantearse por el organismo solicitante:
 - Su naturaleza electrónica, como se señala en el artículo 24, primer párrafo, del proyecto, sin que antes se haya hecho alusión alguna a la misma.
 - Su carácter informativo, tal y como se indica en el artículo 16.1 de la Ley 4/2020, de 10 de julio.
 - Su organización y funcionamiento (por ejemplo, si en el registro van a existir secciones).
 - Su gestión, que se llevará a cabo por INNOCAM, según determina la propia Ley 4/2020, de 10 de julio.

- Los objetivos del registro, mediante la remisión al artículo 16.1 de la Ley 4/2020, de 10 de julio.
 - El contenido de las hojas registrales (denominación, clasificación, NIF, domicilio, modificaciones, cancelaciones, etc.) y la asignación de un número registral a cada agente inscrito.
 - Qué aspectos serán objeto de inscripción (por ejemplo, los agentes acreditados y clasificados; las modificaciones de las acreditaciones; las pérdidas de la acreditación y clasificación como agentes; renovaciones de la acreditación, en su caso, etc.).
 - Efectos de la inscripción en el registro y derechos y obligaciones de los agentes inscritos.
- Siguiendo con el contenido propuesto, la regulación recogida respecto a la inscripción, acreditación y clasificación de los agentes se considera, ciertamente, confusa. Y ello por diversas razones:
- No queda claro si se pretenden regular dos procedimientos separados (uno para la inscripción y otro para la acreditación y clasificación) o un solo procedimiento, pues se observa que se han incluido en el texto unos preceptos para la iniciación del procedimiento de inscripción (artículos 7 y 12) y otro distinto para el procedimiento de acreditación y clasificación (artículo 20). Sin embargo, se emplea un único artículo (el 21) para regular conjuntamente la instrucción y resolución de los procedimientos de inscripción, acreditación y clasificación de agentes, y, posteriormente, en el artículo 23.3, se hace alusión, de forma separada a la *“resolución de inscripción en el registro de agentes del SIDICAM”* y a la *“resolución de acreditación y su clasificación como agente del SIDICAM”*.

Lo anterior conlleva, además, que no se entienda cuál sería la relación entre ambos trámites o procedimientos. Así, en el artículo 13.1 se señala que *“Podrán acreditarse y clasificarse como agente del SIDICAM cualquiera de las entidades y personas físicas que estén inscritos en el registro de agentes del SIDICAM y cumplan como los requisitos para su acreditación y clasificación establecidos en este decreto”*. Esto es, de la literalidad de este precepto, parece que se exige la previa inscripción en el registro de agentes para su posterior acreditación y clasificación. Pero ello hace preguntarse entonces si pueden existir entidades, instituciones o

personas inscritas, pero no acreditadas ni clasificadas, o en qué calidad se inscriben en el registro dichas entidades, instituciones o personas.

A mayor abundamiento, resulta chocante que, para poder proceder a la acreditación y clasificación de las distintas entidades, instituciones y personas no solo se deben cumplir determinados requisitos específicos previstos en los artículos 14 a 18 del proyecto, sino además los recogidos en el artículo 8 para la inscripción de entidades y en el artículo 9 para la inscripción de personas físicas. A la vista de lo expuesto, no se encuentra ningún sentido a que deban presentarse solicitudes separadas para la inscripción y para la acreditación y clasificación y que, para esta acreditación y clasificación, deban cumplirse cumulativamente todos los requisitos previstos para un procedimiento y otro.

Todo ello hace que nos preguntemos, ¿no sería más oportuno prever un único procedimiento en el que se recojan conjuntamente todos los requisitos que han de cumplirse por cada agente o categoría de agente? Este único procedimiento, ¿podría dedicarse únicamente a obtener la acreditación y clasificación de los agentes? Y una vez obtenida esta acreditación y clasificación, ¿no podría preverse que la inscripción en el registro será automática como parece ser el criterio general en la normativa sobre la materia que han aprobado otras Comunidades Autónomas? O, al contrario, ¿el procedimiento único podría referirse a la inscripción que conllevaría la acreditación y clasificación como agente? La respuesta a estas preguntas afectará también a aquellos preceptos en los que se regula la modificación de la circunstancia de los agentes, la pérdida de su acreditación, cancelación de la inscripción o validez de la inscripción.

Obviamente, estos interrogantes se plantean sin perjuicio de las aclaraciones o consideraciones que pueda manifestar el organismo solicitante, que es el conocedor de la materia que se quiere regular.

- No es adecuado mezclar aspectos sustantivos o materiales (como los requisitos que deben cumplirse para la inscripción, acreditación y clasificación) con aspectos procedimentales (relativos a las fases de inicio, instrucción y resolución de los procedimientos). Por ejemplo, mientras el artículo 7 contempla diversas cuestiones relacionadas con el inicio del procedimiento de inscripción, los siguientes artículos 8, 9, 10 se refieren a los requisitos que han de cumplirse para la inscripción, el

artículo 11 a la inscripción de oficio, y en el artículo 12 se vuelve otra vez a aspectos del inicio del procedimiento regulándose la forma de presentación de la solicitud, la documentación a acompañar a la misma, y su valoración.

- También resulta pertinente que, en los artículos dedicados a cada una de las fases de los procedimientos, su contenido se dedique exclusivamente a las cuestiones relacionadas con dichas fases y no con otras. Por ejemplo, el precepto dedicado a la iniciación no habría de contener circunstancias referentes a los órganos competentes para la instrucción o resolución del procedimiento.
- Por último, y en el mismo sentido que el expuesto en la observación anterior, tanto los artículos como los capítulos deben tener un contenido homogéneo respecto a la materia que recogen o regulan. Por ejemplo, no resulta pertinente que el capítulo IV contenga aspectos tan dispares como la instrucción y resolución del procedimiento y, al mismo tiempo, la protección de datos y las actividades estadísticas.

Por otro lado, se exponen a continuación diversas **observaciones específicas**¹:

– **TÍTULO.**

- El título de la disposición proyectada debe adaptarse a su objeto y, en consecuencia, al contenido que alberga. Por ello, y habida cuenta de la primera observación general realizada, el mismo podría rezar, por ejemplo, como sigue: *“Decreto XX/XXX, de XX de XX, por el que se crea y regula el registro de agentes del Sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha”*.

– **PARTE EXPOSITIVA.**

- En su primer párrafo, donde dice *“insta a los poderes públicos”*, se sugiere que diga *“obliga a los poderes públicos”*.
- En el tercer párrafo se señala que *“Estos principios han encontrado plasmación legal con la aprobación de la Ley 4/2020 (...)”*. No obstante, las menciones contenidas en el segundo párrafo anterior no se corresponden

¹ Estas observaciones se exponen sin perjuicio de las observaciones generales previamente planteadas, de forma que, dependiendo de cuál sean las aclaraciones y soluciones que el organismo solicitante pueda plantear respecto a estas últimas, es posible que algunas de las observaciones específicas pierdan su sentido, al haberse realizado a la vista del primer borrador remitido.

con principios, sino con atribuciones de competencias. Por esta razón, el enunciado transcrito se debería sustituir, por ejemplo, por el siguiente: “*En ejercicio de esta atribución competencial se aprobó la Ley 4/2020 (...)*”.

- En el cuarto párrafo se recomienda que se incluya la mención concreta al artículo de la Ley 4/2020, de 10 de julio, donde se recogen los objetivos generales de este texto legal. Además, en este mismo párrafo, donde dice “*artículo 15*”, debería decir “*artículo 15.1*”, y donde dice “*apartado cuarto*”, debería decir “*apartado 4*”.
- En el quinto párrafo se echa en falta la alusión al artículo 16.4 de la Ley 4/2020, de 10 de julio.
- El séptimo párrafo, particularmente en su primer enunciado, ha de adaptarse al objeto y la materia que debe regular el proyecto de decreto, de acuerdo con la primera observación general efectuada.
- En el párrafo duodécimo no se mencionan los trámites de consulta pública previa, cuya realización ya ha quedado justificada, ni el proceso participativo al que debe someterse el texto, como se verá más adelante.
- En la fórmula promulgatoria (párrafo decimocuarto), ha de eliminarse la referencia a la Ley 11/2003, de 15 de septiembre.

Asimismo, en este párrafo, donde dice “*previo dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha*”, debe decir, en tanto no se pronuncie este órgano consultivo, “*oído/de acuerdo con el Consejo Consultivo*”. Una vez que ya se disponga de dicho dictamen, si se aceptan las observaciones y sugerencias emitidas por el citado órgano, deberá mencionarse “*de acuerdo con el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha*”; en caso contrario se señalará “*oído el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha*”.

Por último, habría que incluir la referencia a la fecha de la reunión del Consejo de Gobierno en la que se procedió a la aprobación del proyecto.

De acuerdo con lo expuesto, la fórmula promulgatoria quedaría con la siguiente redacción:

“En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, oído/de acuerdo con el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y previa

deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de XX de XXXX, de 202X,”

- Finalmente, en esta parte expositiva no se ha incluido un párrafo en el que se justifique la obligación, particularmente de las personas físicas, de relacionarse a través de medios electrónicos con esta Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

– **PARTE DISPOSITIVA. ARTICULADO.**

- El **artículo 1**, dedicado al objeto del proyecto, ha de adaptarse a las observaciones generales realizadas, de tal forma que en el mismo debe aludirse a la creación y regulación del registro de agentes y de las estructuras y equipamientos de los entes públicos del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha, y puede concretarse qué es lo que se recoge respecto a esta regulación (los procedimientos de acreditación y clasificación, la inscripción, los requisitos que han de cumplirse, la pérdida de la acreditación y clasificación, etc.).

Por lo demás, en dicho objeto deberían evitarse menciones a enumeraciones de instituciones, entidades, centros o personas, ya que estas cuestiones parecen más propias del ámbito de aplicación de la norma.

- En el **artículo 2** se incluye un ámbito de aplicación que, bajo nuestro parecer, es restrictivo o limitativo.

De acuerdo con ello, creemos que el ámbito de aplicación del decreto debe referirse, sin más, a los agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha previstos en el artículo 15.1 de la Ley 4/2020, de 10 de julio, y a las infraestructuras y equipamientos de los entes públicos de dicho sistema, de acuerdo con su artículo 16.3, por lo que ha de eliminarse la alusión a las instituciones, organismos, entes y personal incluidas en este precepto y que se recogen en el artículo 16.2 del mismo texto legal, a salvo que, respecto a ellos, y según considere el organismo solicitante, se incluya en el proyecto la forma en la que se garantizará que tales instituciones, organismos, entes y personal se inscriban en el registro.

- Por lo que se refiere al **artículo 3**, hay que recordar que, con carácter general, no es correcta la mera reproducción de preceptos legales en

normas reglamentarias, por lo que habría que eliminarlo, más si se tiene en cuenta que, conforme a la observación anterior, ya se haría referencia a estos agentes mediante la correspondiente remisión al precitado artículo 15.1 de la Ley 4/2020, de 15 de julio. En consecuencia a ello, cualquier remisión que se haga en el resto del texto a este precepto habrá de modificarse.

- El **artículo 4** no ha de incluirse en este capítulo, pues parece que su contenido es más propio de una disposición final, debiendo ubicarse en el texto por delante de las disposiciones relativas a la habilitación de desarrollo normativo y a la entrada en vigor.
- El **artículo 5** tampoco debería constar en este capítulo, sino en el referido a la acreditación y clasificación de los agentes.

Asimismo, hay que señalar que la estructura recogida en este precepto no es adecuada desde un punto de vista de técnica normativa. Así, no es correcto incluir en el párrafo introductorio de cada uno de los dos apartados existentes la enumeración de las clasificaciones de agentes, para luego repetir esta enumeración seguidamente cuando se contempla la definición de cada una de aquellas clasificaciones.

Es decir, el texto, en lugar de decir:

“(...) las entidades del SIDICAM se clasifican de la siguiente manera: universidad, centro de investigación, instituto de investigación (...):

a) Centro de investigación: (...).

b) Instituto de investigación: (...).

(...)”.

Debería decir:

“(...) las entidades del SIDICAM se clasifican de la siguiente manera:

a) Centro de investigación: (...).

b) Instituto de investigación: (...).

(...)”.

Por otra parte, cabe advertir que en el apartado 1 de este precepto no se ha incluido la definición de “*universidad*” y que la definición de “*centro tecnológico*” que se ofrece en la letra d) no se adapta a la definición recogida en el artículo 5.2.h) de la Ley 4/2020, de 10 de julio, para tal tipo de centro.

También llama la atención el hecho de que se hable en este artículo (y en el resto del texto proyectado) de un concepto como el de “*entidades*”, que podría dar lugar a confusión, cuando los artículos 15 y 16 de la Ley 4/2020, de 10 de julio, también se refieren a otros conceptos como los de “*instituciones*”, “*estructuras*”, “*clústeres*” o “*centros*”. Lo mismo ocurriría con la expresión “*recursos humanos*”, en la que se desconoce si se englobaría solo a personas físicas o también, por ejemplo, a grupos de personas físicas (como los grupos de investigación).

Hay que tener en cuenta que, a la hora de establecer su clasificación o categorización, debe considerarse la distinta naturaleza que parecen ostentar los agentes contemplados en el artículo 15.1 de la Ley 4/2020, de 10 de julio. Por ello, quizás sería conveniente que el organismo solicitante se plantee, para una mayor claridad y si es posible, que junto a cada categoría o clasificación se incluyan aquellos agentes previstos en el citado artículo 15.1 correspondientes a dicha categoría.

- El **artículo 6.1** habría que incluirlo en aquellos preceptos que, de acuerdo con la primera observación general realizada, se dediquen a la creación, naturaleza, adscripción, gestión y organización del registro.
- El **artículo 6.2** no se adapta al contenido del artículo 16.5 de la Ley 4/2020, de 10 de julio.
- En el **artículo 7.2** se dice que el procedimiento de inscripción en el registro de agentes se iniciará a solicitud de las personas interesadas “*excepto en los supuestos previstos en el artículo 11, en los que se inicia de oficio*”. No obstante, si se acude a este artículo 11, en su apartado 1, se señala que “*En el caso de entidades, se procederá a la inscripción de oficio en el registro de agentes del SIDICAM (...)*”.

A la vista de lo anterior, no queda claro si lo que se pretende es incoar un procedimiento de oficio para inscribir a las entidades previstas en el artículo 11.1, en cuyo caso sería necesario precisar, al menos, el órgano competente para iniciar dicho procedimiento, el competente para



resolverlo, así como el régimen de recursos y de la falta de notificación de resolución expresa en el plazo que también se ha de precisar (aunque entenderíamos que, en principio, sería el mismo que para las inscripciones a solicitud de las entidades, instituciones o personas interesadas); o si lo que se pretende es proceder a inscribir sin más, a las citadas entidades, mediante el correspondiente acto en forma de resolución, para lo cual deben disponerse de todos los datos, documentos e informaciones necesarios para realizar dicha inscripción, a lo que hay que añadir la necesaria existencia de razones que motiven esta circunstancia (por ejemplo, por la naturaleza de estas universidades, instituciones o entidades).

- En el **artículo 8.1** vuelve a emplearse el término “*entidades*”, aunque aquí parece que este concepto se asimila a “*personas jurídicas*” a la vista del requisito recogido en su letra c) - salvo para el supuesto de institutos universitarios de investigación-. Ello hace que nos preguntamos si no puede procederse a la inscripción de aquellas entidades, instituciones, centros o agrupaciones que no tengan personalidad jurídica. Así, el artículo 15.1.h) de la Ley 4/2020, de 10 de julio, se refiere a los “*clústeres*” como uno de los agentes del sistema que, según el artículo 5.2.k) del mismo texto legal, se definen como agrupaciones de empresas, organismos de I+D+i e instituciones de financiación pública y privada, con lo que se duda de que este tipo de agentes, entendidos como un grupo de instituciones, entidades o empresas, puedan tener personalidad jurídica propia. O el artículo 16.5 habla de la inscripción de “*personas físicas o jurídicas*”, pero también de “*centros y grupos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación*”.

Esta observación se hace extensiva a todos aquellos artículos del proyecto que se refiere a estas “*entidades*”.

- No se comprende la razón por la se realiza una separación de los requisitos exigidos a las organizaciones empresariales y empresas entre los **artículos 8.2 y 8.3**, en tanto que este último se remite al artículo 3.j) del proyecto que recoge, precisamente, a dichas organizaciones empresariales y empresas.
- Desde el punto de vista de la técnica normativa, la estructura del **artículo 8.3.b)** no es correcta. Cabe recordar que, cuando deba subdividirse un apartado de un artículo, ha de hacerse en párrafos señalados con letras

minúsculas, ordenadas alfabéticamente y, cuando estos párrafos deban, a su vez, subdividirse, se numerarán las divisiones con ordinales arábigos (1.º, 2.º, etc.).

Por ello, en este artículo, donde dice:

“b) Haber demostrado su carácter innovador (...):

i. Por disponer de una patente (...).

ii. Por haber obtenido (...).

(...)”.

Debe decir:

“b) Haber demostrado su carácter innovador (...):

1.º Por disponer de una patente (...).

2º. Por haber obtenido (...).

(...)”.

- El **artículo 9** parece que se refiera a “*personas físicas*” individualmente consideradas. No obstante, reiteramos que surge la duda de si es posible que agrupaciones de personas físicas (como los grupos de investigación), se acrediten, clasifiquen e inscriban en el registro de agentes. En este sentido cabe recordar, por ejemplo, que el artículo 16.5 de la Ley 4/2020, de 10 de julio, habla de tales grupos de investigación.

Además de lo anterior, en la letra a) de este artículo se repite en dos ocasiones el término “*licenciatura*”.

- En el **artículo 11** no se hace indicación de cómo se va a proceder a la inscripción de oficio. A estos efectos nos remitimos a lo expresado anteriormente para el **artículo 7.2** del proyecto.

Esta observación se hace extensiva al **artículo 19**.

- Si el **artículo 11.2** se dedica a la inscripción de las personas físicas, no debería contener aspectos de su acreditación como agentes del SIDICAM.

- En el **artículo 12.3** se recoge la referencia a un “Anexo 1” que puede dar a entender que se adjunta al proyecto de decreto, no siendo así. Por esta razón tal referencia debe eliminarse.

Esta observación se hace extensiva al **artículo 20.9**.

- En el **artículo 12.4** debería eliminarse la referencia al “*órgano instructor*”, en tanto que, a nuestro juicio, este precepto está dedicado a la fase de iniciación del procedimiento, y no constituyen funciones de tal órgano las expresadas en este precepto.

Esta observación se hace extensiva al **artículo 20.10**.

- El título del **artículo 13** no puede ser (prácticamente) el mismo que el del **capítulo III**, pues en tal caso la existencia del resto de artículos (14 a 20) en el mismo capítulo no tendría sentido.

En el apartado 2 de este artículo, parece que la referencia al artículo 8 debería realizarse al artículo 9.

- En cuanto a los requisitos establecidos en los **artículos 14 a 18** para la acreditación y clasificación de agentes del SIDICAM ha de advertirse que, en determinados supuestos, no parece quedar claro cuándo dichos requisitos deben cumplirse.

A título de mero ejemplo, en el artículo 15.1, respecto a los institutos universitarios de investigación, se dice que deberán obtener una evaluación positiva, es decir, se habla en futuro. Sin embargo, si se acude al apartado 3 del mismo artículo, se contempla que “*Además de haber obtenido la evaluación positiva (...)*”, esto es, se habla en pasado.

Otro ejemplo lo tenemos en el artículo 20.8, en el que se dice que las entidades singulares deben presentar un “*Plan estratégico en el que se exponga cómo van a cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 18 (...)*”. Pero si se acude a este último precepto se señala que “*Para obtener la acreditación y clasificación como agente del SIDICAM (...) deberán reunir alguno de los siguientes requisitos (...)*”. Entonces en este caso, ¿cuándo deben concurrir los requisitos exigidos?

- En el **artículo 19.1** se ha omitido la letra h) que, de acuerdo con el artículo 11.1.h), entendemos que se ha de referirse a los “*Centros Tecnológicos de*

Castilla-La Mancha”. En base a ello, se desconoce si esta omisión es deliberada o no, y si es así parece que no tendría sentido que a estos centros se les inscriba de oficio, pero no se les acredite y clasifique de esta manera.

- El **artículo 20** es excesivamente largo, en tanto que las directrices de técnica normativa aconsejan no sobrepasar los cuatro apartados. Asimismo, en los apartados 3 a 8 debería evitarse la repetición del enunciado *“además de la documentación indicada en el apartado 2”* (por ejemplo, previéndose un solo apartado o artículos independientes para cada uno de los apartados citados).
- El **artículo 20.4.c)** parece contener errores de redacción que deberían revisarse y, en su caso, corregirse.
- En el **artículo 20.8** no debe subdividirse. Por ello, donde dice *“(…) las entidades singulares deberán presentar la siguiente documentación: a) Plan Estratégico (…)”*, debe decir, *“(…) las entidades singulares deberán presentar un Plan Estratégico (…)”*.
- En relación con el **artículo 21.2**, cabe advertir que, en principio, es en la fase de instrucción donde han de realizarse todos aquellos actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos, tal y como establece el artículo 75.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Y previamente a la propuesta de resolución (que se constituye como el acto finalizador de la instrucción), deberá procederse con el trámite de audiencia en virtud del artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el que se ponga de manifiesto el expediente a las personas interesadas.

Por ello, si el órgano competente para resolver pretende realizar ciertas comprobaciones, habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto a las llamadas actuaciones complementarias.

- En el **artículo 21.3** donde dice *“adoptada”*, debe decir *“dictada”*.

Esta observación se hace extensiva al **artículo 23.5**.

- Respecto al **artículo 21.4**, y de acuerdo con un reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, este Servicio

Jurídico viene exponiendo en sus informes que, en aquellos preceptos de proyectos de disposiciones o borradores de resoluciones que se dediquen a los recursos administrativos que quepa interponer contra las resoluciones que pongan fin a los procedimientos, no se haga indicación alguna de la forma en la que se computa el plazo para dicha interposición. Además, el objeto del recurso debería ser la resolución “*definitiva*” del procedimiento.

De este modo, en el precepto citado, donde dice:

“Contra la resolución que resuelva el procedimiento cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación, ante la persona titular de la Presidencia de INNOCAM, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre”.

Debe decir:

“Contra la resolución definitiva del procedimiento podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante la persona titular de la Presidencia de INNOCAM, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre”.

- En los **artículos 22 y 23** prevén aspectos relativos a la modificación de las circunstancias de los agentes y a la pérdida del “reconocimiento” y cancelación de la inscripción y acreditación en el registro y a la obligación de los agentes de comunicar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a esta modificación, pérdida o modificación. Sin embargo, resultaría pertinente que se recogiese en el texto proyecto cuáles van a ser los mecanismos de seguimiento y supervisión que se realizarán para poder comprobar que los datos contenidos en el registro se corresponden con la realidad de las circunstancias de los agentes inscritos. En este sentido, en el artículo 24, en su primer párrafo, dice que “(...) *por irregularidades constatadas durante el seguimiento* (...)” puede ser cancelada la inscripción de los agentes y su acreditación, pero previamente no se explica nada en el proyecto sobre tal seguimiento (por ejemplo, podría preverse que, con la periodicidad que se determine, se requerirá a los agentes inscritos para que confirmen que los datos obrantes en el registro se encuentran vigentes; o podría determinarse la obligación de presentar una determinada documentación, etc.).

- En el **artículo 22** no se ha previsto el recurso que cabría contra las resoluciones definitivas del procedimiento de modificación de circunstancias de los agentes. No obstante, y con el objeto de no reiterar en los artículos 21, 22 y 23 el mismo régimen de recursos, sería oportuno prever un único artículo dedicado a esta materia.
- En el **artículo 22.4**, donde dice “*no hubiera notificado la resolución*”, debería decir “*no hubiera notificado resolución expresa*”.

Esta observación se hace extensiva al **artículo 23.5**.

- En el **artículo 22.5**, donde dice “*introducir*”, entendemos que debería decir “*inscribir*”.
- En el **artículo 23.2**, donde dice “*apartado primero*”, debe decir “*apartado 1*”.
- En el **artículo 23.4**, donde dice “*expediente*”, debe decir “*procedimiento*”.
- En relación con el **artículo 23.5** es necesario advertir que las consecuencias en él previstas en cuanto a la falta de notificación de resolución expresa en el plazo establecido solo serían aplicables a los procedimientos de cancelación iniciados a solicitud de las personas interesadas, pero no en aquellos incoados de oficio, supuesto en el que habrá que estar a lo regulado en el artículo 25.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
- En el **artículo 23.6**, donde dice:

“Contra las resoluciones podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Presidencia de INNOCAM, de acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre”

Debería decir:

“Contra las resoluciones definitivas de los procedimientos recogidos en este artículo podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Presidencia de INNOCAM, de acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre”

- El **artículo 24** debería dividirse en dos apartados numerados.

Además, y respecto a los institutos universitarios de investigación, no se aclara desde cuándo comenzaría a computar el plazo de cinco años de validez de su acreditación, clasificación e inscripción.

Junto a lo anterior se pregunta este Servicio Jurídico si convendría establecer un régimen de renovación, en lugar de preverse que tales institutos deban presentar una nueva solicitud (que entendemos que se refiere a solicitar nuevamente su acreditación, clasificación e inscripción). Para el caso de que se opte por regular la renovación, habría que incluir todos aquellos aspectos procedimentales correspondientes (plazo para presentar la solicitud antes de que expire la vigencia de su acreditación, clasificación e inscripción; plazo para notificar la resolución, órgano competente, recursos, etc.), así como las consecuencias de no solicitar la renovación en el plazo establecido.

- En el **artículo 25** se regula la llevanza por INNOCAM de un registro de actividades de tratamiento. Sin embargo, nada se contiene en este precepto ni en el resto del proyecto respecto al régimen de publicidad del registro, al acceso por terceras personas a los datos contenidos en el mismo o a la emisión de certificaciones.

Tampoco se dice nada sobre los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación, portabilidad y sobre no ser objeto de decisiones individualizadas que les corresponderían a los agentes inscritos.

– **PARTE DISPOSITIVA. PARTE FINAL.**

- **Disposición transitoria única.** Esta disposición se remite, erróneamente, al artículo 17.5 de la Ley 4/2020, de 10 de julio, que se refiere a la evaluación del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha, entendiendo este Servicio Jurídico que la remisión debe realizarse al artículo 16.5 del mismo texto legal.

Por otro lado, y salvo aclaración en contrario, el contenido de esta disposición parece no ser acorde con el recogido en el precepto anteriormente señalado. En efecto, mientras en el texto remitido se dice que “(...) *las personas físicas o jurídicas, centros y grupos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación que no estén inscritas en el registro y hayan participado en una convocatoria de ayudas regional en materia de I+D+i dispondrán de un plazo de un año contado desde la entrada en vigor*

de este decreto para proceder a la inscripción en el registro”, en el artículo 16.5 de la Ley 4/2020, de 10 de julio, se señala que “La inscripción en el registro será preceptiva para todas aquellas personas físicas o jurídicas, centros y grupos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación que quieran acogerse a las convocatorias regionales, determinándose en el reglamento de organización y funcionamiento del registro un periodo transitorio”.

- **Disposición final primera.** No es posible facultar a la persona titular de la Gerencia de INNOCAM para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del decreto por la simple razón de que el citado organismo autónomo no ostenta potestad reglamentaria alguna, correspondiéndole este desarrollo a la persona titular de la consejería con competencias en materia de investigación, desarrollo e investigación.

Por último, se exponen a continuación, a mero título de ejemplo, diversas consideraciones dirigidas a la corrección de errores de redacción, omisiones, reiteraciones, etc.:

- Salvo que sea inevitable, debe evitarse el empleo de términos iguales o similares de forma próxima en el texto. Así, en el párrafo octavo de la parte dispositiva se dice *“Finalmente, este decreto (...)”* y, más adelante, en el párrafo decimotercero, que se refiere también a los principios de buena regulación, se señala *“Finalmente, y en cuanto (...)”*; o, en el artículo 8.3 se contempla que *“En el caso de las entidades recogidas en la letra j) del artículo 3 del presente decreto, las entidades solicitantes deberán cumplir (...)”*.
- A la hora de realizar citas de disposiciones normativas a lo largo del texto deben considerarse ciertas directrices. A saber:
 - Ha de respetarse el uso de mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, en la disposición transitoria única, donde dice *“ley 4/2020, de 10 de julio”*, debe decir *“Ley 4/2020, de 10 de julio”*.
 - Tanto en la parte expositiva como en la parte dispositiva, la primera cita debe realizarse de forma completa, pudiendo abreviarse en las demás ocasiones señalando únicamente tipo, número y año, en su caso, y fecha. Por ejemplo, en el artículo 2 la cita de la Ley 4/2020, de 10 de julio, ha de realizarse completa, pues es la primera que aparece en la parte dispositiva; en el artículo 12.2.c) la alusión a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, también debe ser completa.

- Tanto la fecha de las disposiciones como su nombre deben escribirse siempre entre comas.
- Respecto a la utilización de siglas, la primera vez que se haga uso de una de ellas, tanto en la parte expositiva como en la dispositiva, debe explicarse su significado. Por ejemplo, y salvo error nuestro, en el artículo 7.1 se alude por primera vez en la parte dispositiva a “*INNOCAM*” sin explicarse qué significan estas siglas.
- Cuando se cita un precepto de la misma disposición no deberían utilizarse expresiones como “*de este decreto*” o “*del presente decreto*”, salvo cuando se citen conjuntamente preceptos de la propia disposición y de otra diferente. Lo mismo ocurre respecto a citas que afectan a una parte del artículo en la que aquella se produce. Por ejemplo, en el artículo 12.3.e) se dice “*(...) conforme a lo previsto en el artículo 8.3 de este decreto*”, debiendo decir “*conforme a lo previsto en el artículo 8.3*”; o en el artículo 15.3, donde dice “*Además de haber obtenido la evaluación positiva indicada en los apartados 1 y 2 de este artículo (...)*”, debe decir “*Además de haber obtenido la evaluación positiva indicada en los apartados 1 y 2 (...)*”.
- Deben corregirse todos aquellos errores gramaticales u ortográficos que se hayan cometido en el texto. Por ejemplo, en el artículo 10 donde dice “*se deberá reunir los siguiente requisitos*”, debe decir “*se deberán reunir los siguientes requisitos*”; donde dice “*a) Que esté radicado en Castilla-La Mancha*”, debe decir “*a) Que estén radicados en Castilla-La Mancha*” y donde dice “*b) Que tenga un precio público de utilización*”, debe decir “*b) Que tengan un precio público de utilización*”.
- Ha de utilizarse una terminología homogénea cuando el proyecto quiera referirse a los mismos conceptos. Por ejemplo, en el artículo 12.2.c) se habla de las “*agrupaciones o asociaciones empresariales y empresas*”, pero el artículo 8.2 se hace referencia a “*organizaciones empresariales o empresas*”; en los artículos 22 y 23 se contiene el término “*reconocimiento*”, que no aparece anteriormente en el texto y se desconoce si dicho concepto quiere emplearse en sustitución de otros, como los de “*acreditación y clasificación*”; o en los artículos 8.1.e) y 20.5.b) se hace alusión al “*órgano gestor*”, que no se sabe si se refiere al órgano competente para instruir el procedimiento o al competente para resolver (sea cual sea el caso, en este último ejemplo se aconseja que se eliminen las menciones a dicho órgano).

Las observaciones generales y específicas recogidas anteriormente obligarían al organismo solicitante a llevar a cabo una profunda revisión del texto remitido a fin

recoger en el mismo las omisiones citadas y de establecer un proyecto de disposición normativa con un contenido preciso y una estructura clara y ordenada.

QUINTO. - Procedimiento de elaboración y aprobación del proyecto.

En lo que se refiere al procedimiento de elaboración de normas reglamentarias ha de acudirse primeramente a las disposiciones recogidas en el título VI (artículos 127 a 133) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, denominado *“De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones”*, cuyo contenido se ha visto atemperado en virtud de la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 55/2018, de 24 de mayo.

En segundo lugar, y en el ámbito autonómico, habrá de tenerse en cuenta el régimen contenido en el capítulo V (artículos 35 a 37) del título II de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre. En particular, el artículo 36 de este texto legal señala que:

“1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Consejo de Gobierno, sin perjuicio de la facultad de sus miembros para dictar normas reglamentarias en el ámbito propio de sus competencias.

2. El ejercicio de dicha potestad requerirá que la iniciativa de la elaboración de la norma reglamentaria sea autorizada por el Presidente o el Consejero competente en razón de la materia, para lo que se elevará memoria comprensiva de los objetivos, medios necesarios, conveniencia e incidencia de la norma que se pretende aprobar.

3. En la elaboración de la norma se recabarán los informes y dictámenes que resulten preceptivos, así como cuantos estudios se estimen convenientes.

Cuando la disposición afecte a derechos o intereses legítimos de los ciudadanos se someterá a información pública de forma directa o a través de las asociaciones u organizaciones que los representen, excepto que se justifique de forma suficiente la improcedencia o inconveniencia de dicho trámite.

Se entenderá cumplido el trámite de información pública cuando las asociaciones y organizaciones representativas hayan participado en la elaboración de la norma a través de los Órganos Consultivos de la Administración Regional.

4. De no solicitarse dictamen del Consejo Consultivo, por no resultar preceptivo ni estimarse conveniente, se solicitará informe de los servicios jurídicos de la Administración sobre la conformidad de la norma con el ordenamiento jurídico.

5. El Consejo de Gobierno remitirá a la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha los dictámenes emitidos por el Consejo Consultivo en relación con los Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones”.

Además, y, en tercer lugar, debe considerarse lo estipulado por el apartado 3.1.1 de las vigentes Instrucciones sobre el Régimen Administrativo del Consejo de Gobierno (en adelante, ICG).

En consecuencia, y previamente a la elevación del proyecto de decreto al Consejo de Gobierno, han de realizarse los siguientes trámites y aportarse los documentos que se indican a continuación, salvo que por parte del órgano proponente ya se hayan llevado a cabo dichos trámites o se hayan incorporado tales documentos:

- **Consulta pública previa**, que se realizará a través del Portal de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha, de acuerdo con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el Acuerdo de 01/02/2022, del Consejo de Gobierno, por el que se dictan instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa.

Consta en el expediente informe de 30 de noviembre de 2023, suscrito por la persona titular de la Gerencia de INNOCAM, en el que se contemplan los resultados de la consulta pública realizada en relación con la disposición proyectada entre los días 16 y 29 de noviembre de 2023, constando la recepción de 1 opinión o aportación que se incluye en un documento anexo.

- **Memoria justificativa del proyecto**, con el contenido expuesto en el artículo 36.2 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, y en la letra c) del apartado 3.1.1 de las ICG.

Entre la documentación recibida figura una memoria justificativa de la persona titular de INNOCAM de fecha 17 de junio de 2024, que recoge los aspectos relativos a la oportunidad del proyecto (fines y objetivos, adecuación a los principios de buena regulación y alternativas); a su contenido, análisis jurídico y descripción de la tramitación, así como un análisis de su impacto desde el punto de vista competencial; presupuestario; sobre la competencia, unidad de mercado y competitividad; cargas administrativas; por razón de género; en la infancia, la adolescencia y la familia y sobre la discapacidad.

En este documento se echa en falta, no obstante, una memoria económica más detallada en relación con el gasto que la aprobación del proyecto puede suponer. Sobre este particular, en la memoria justificativa se indica que *“La administración de este registro requiere la asignación de personal humano. El costo presupuestario sería equivalente al salario de un técnico superior, en torno a 40.000 € brutos al año”*.

Por otro lado, y respecto a la tramitación del proyecto, resulta relevante destacar que la propia memoria expresa que *“Dado el carácter novedoso, organizativo y funcional del presente proyecto de decreto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, se ha considerado llevar a cabo los trámites de consulta previa pública y de participación ciudadana, ya que la norma afecta a derechos e intereses legítimos de las personas o entidades, así como el trámite de información pública”*.

- **Autorización de la persona titular de esta Consejería** para el inicio del procedimiento de elaboración de la disposición reglamentaria, en virtud del artículo 36.2 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, que en nuestro caso ha sido suscrita el 18 de junio de 2024.
- **Proceso participativo**, en el que se someterá el texto proyectado a la ciudadanía mediante los instrumentos y el procedimiento recogidos en la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha.

Es necesario advertir que este trámite resulta preceptivo para el proyecto recibido en tanto que así se encuentra previsto en el Programa de Participación Ciudadana para el año 2024, aprobado por Acuerdo de 06/02/2024 del Consejo de Gobierno (DOCM nº 30 de 12 de febrero de 2024).

- **Información pública del proyecto**, a realizar de conformidad con el artículo 36.3 de la Ley 11/2003, de 11 de septiembre, debiendo elaborarse posteriormente un informe en el que se recojan, en su caso, las alegaciones efectuadas, así como el tratamiento que se van a dar a las mismas en cuanto a los motivos que justifiquen su aceptación o denegación.
- **Informe o visto bueno del Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha** respecto a la previsión del artículo 26 del proyecto.

- **Informe o visto bueno de la unidad de esta Consejería responsable en materia de protección de datos de carácter personal** en relación con el artículo 25 del proyecto.
- **Informe de impacto de género**, en virtud del artículo 6.3 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre hombres y mujeres de Castilla-La Mancha.
- **Informe de impacto demográfico**, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del medio Rural en Castilla-La Mancha, y la Resolución de 24/02/2022, de la Vicepresidencia, por la que se establecen directrices, criterios y metodologías para la elaboración del informe sobre impacto demográfico en los proyectos de normas, planes y programas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- **Informe de la persona que desempeña las funciones de Coordinación de Simplificación, Actualización e Inventario de Procedimientos en esta Consejería**, en virtud del artículo 34.1 del Decreto 69/2012, de 29/03/2012, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- **Informe de la Inspección General de Servicios** sobre la normalización y racionalización de los procedimientos administrativos, según se exige en la letra f) del apartado 3.1.1 de las ICG, habida cuenta que el texto proyectado contiene normas de dicho carácter.
- **Informe de la Secretaría General de esta Consejería**, conforme a la letra g) del apartado 3.1.1 de las ICG.
- **Informe de la consejería competente en materia Administraciones Públicas**, por exigencia de la letra h).1º del apartado 3.1.1 de las ICG, en relación con la necesidad de asignación de personal humano para la administración del registro de agentes.
- **Informe de la consejería competente en materia de hacienda**, tal y como indica la letra h).4º del apartado 3.1.1 de las ICG, ya que la norma proyectada supondría incremento de gasto para la Hacienda regional al requerirse la precitada asignación del personal humano que podría suponer, según contempla la memoria justificativa, un coste que “(...) sería

equivalente al salario de un técnico superior, en torno a los 40.000 € brutos al año”.

Específicamente dicho informe, que habrá de ser favorable, deberá recabarse de la dirección general competente en materia de presupuestos, de conformidad con lo establecido por el artículo 22 de la Ley 11/2023, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2024. Para ello deberá seguirse la tramitación recogida en el artículo 9 y en la disposición adicional quinta de la Orden 204/2023, de 27 de diciembre, de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2024.

- **Informe del Gabinete Jurídico**, como preceptúa el artículo 10.1.a) de la Ley 5/2013, de 17 de octubre.
- **Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha**, que resulta preceptivo al encontrarnos ante un reglamento que pretende dictarse en ejecución de una ley, tal y como prevé el artículo 54.4 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre.

El expediente que se eleve al Consejo de Gobierno deberá incorporar, además de los trámites, informes y dictámenes señalados anteriormente, los documentos a los que se refieren las letras a) y b) del apartado 3.1.1 de las ICG.

Una vez aprobada la disposición proyectada por el Consejo de Gobierno, deberá procederse a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en orden a su entrada en vigor y producción de efectos jurídicos, tal y como dispone el artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 36 de la Ley 3/1984, de 3 de abril, sobre Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por último, ha de recordarse primeramente que, en aplicación del artículo 12 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, deben ser objeto de publicación en el Portal de Transparencia de esta Administración los proyectos de reglamentos, acompañados de las memorias, informes y otros documentos que integren los correspondientes expedientes de elaboración de dichas normas. Para ello se seguirá lo preceptuado también en la Instrucción de 1 de febrero de 2019, de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Y, en segundo término, que los distintos borradores del proyecto que se vayan



elaborando deberían ir fechados, como ha advertido en múltiples ocasiones el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, a los efectos de observar la evolución del contenido del texto propuesto.

Es cuanto cabe informar a los efectos oportunos, sin perjuicio de mejor criterio fundado en derecho.

En Toledo, a fecha de la firma electrónica

EL JEFE DE SECCIÓN

EL JEFE DEL SERVICIO JURÍDICO